

Santiago, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés.

Visto:

En estos autos Rit O-61-2021, Ruc 2140330274-8, del Juzgado de Letras del Trabajo de San Felipe, por sentencia de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, se acogió la demanda interpuesta por doña Karen Cecilia Pasten Abarca en contra de la Municipalidad de Llay Llay, sólo en cuanto se dispuso que debía ser reincorporada a sus funciones anteriores a su despido, con costas.

En relación con el referido fallo la demandante dedujo recurso de nulidad, que fue acogido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, mediante resolución de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, declarando que se hace lugar a la demanda, además, en cuanto se condena a la demandada al pago de las remuneraciones que corresponden por el tiempo que estuvo separada de sus funciones.

Respecto de esta sentencia, la demandada dedujo recurso de unificación de jurisprudencia pidiendo que se dicte la de reemplazo que describe.

Se ordenó traer estos autos en relación.

Considerando:

Primero: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483-A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existen distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de tribunales superiores de justicia. La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones sobre el asunto de que se trate sostenidas en las mencionadas resoluciones y que haya sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, se debe acompañar la copia fidedigna del o de los fallos que se invocan como fundamento.

Segundo: Que en cuanto a la unificación de jurisprudencia pretendida en estos en lo que se refiere a la materia de derecho objeto del juicio, dice relación con determinar *"el real alcance de las reglas generales del*



Código del Trabajo en cuanto a establecer si subsidiariamente se debe aplicar para el caso de la trabajadora regida por el Estatuto Docente", por cuanto se estimó, erradamente, que correspondía el pago de las remuneraciones durante el tiempo de la separación de funciones de la actora, aplicando de manera subsidiaria el código del ramo.

Tercero: Que dada la conceptualización que el legislador ha hecho del recurso en estudio, constituye un factor necesario para alterar la orientación jurisprudencial de los tribunales superiores de justicia acerca de alguna determinada materia de derecho "objeto del juicio", la concurrencia de, a lo menos, dos resoluciones que sustenten distinta línea de razonamiento al resolver litigios de idéntica naturaleza. De esta manera, no se aviene con la finalidad y sentido del especial recurso en análisis, entender como una contraposición a la directriz jurisprudencial la resolución que pone fin a un conflicto sobre la base de distintos hechos asentados o en el ámbito de acciones diferentes, en tanto ello supone necesariamente la presencia de elementos disímiles, no susceptibles de equipararse o de ser tratados jurídicamente de igual forma.

Cuarto: Que, para determinar si los presupuestos de las sentencias materia de análisis son similares, es necesario tener presente que el fallo recurrido acogió el recurso de nulidad teniendo en consideración que "efectivamente en la argumentación planteada por el Tribunal para rechazar la pretensión de la actora, se ha incurrido en una clara infracción de ley, pues por una parte, no existiendo una norma expresa que regule esta materia en el Estatuto Docente, debe aplicarse supletoriamente el Código del Trabajo, el que se refiere en dos normas que menciona, artículos 201 y 174 del código mencionado, a la necesidad de que se remunere al trabajador o trabajadora cuando un despido ha sido declarado ilegal", agregando que "no por falta de una ley expresa que regle la materia el Tribunal se encuentra en condiciones de fallar en contra de la trabajadora. Por el contrario, haciendo una interpretación armónica de las disposiciones legales citadas, que se ponen precisamente en el caso de que al declararse la ilegalidad de un despido corresponde el pago



de las remuneraciones, lo resuelto en ese sentido por el Tribunal implica una infracción de ley, de la forma como se ha explicado precedentemente”.

Quinto: Que, para los efectos de fundar el recurso de unificación de jurisprudencia la recurrente citó el fallo dictado por esta Corte en la causa Rol N° 10.266-2011, que señaló que *"debe entenderse unificada la jurisprudencia en el sentido que el artículo 171 del Código del Trabajo no resulta aplicable a los profesionales de la Educación regidos por el estatuto docente; que éstos no tienen derecho a indemnizaciones por el término de su contrato de trabajo sino cuando expresamente el mencionado estatuto lo contemple; y que la sanción del artículo 162 inciso séptimo del Código Laboral, de haber sido aplicable este cuerpo de normas igualmente no rige cuando, como en la especie, es el trabajador quien pone término a la relación laboral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del Código citado"*.

Sexto: Que, en consecuencia, como la situación planteada en la sentencia impugnada difiere de aquella de que trata la citada como contraste, no concurre el requisito que se analiza, esto es, que se esté en presencia de situaciones que se puedan homologar; razón por la que el recurso no puede prosperar y debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y en conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 483 y siguientes del Código del ramo, **se rechaza el recurso de unificación de jurisprudencia** interpuesto por la demandada en relación con la sentencia de veintiocho de febrero del año dos mil veintidós de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Regístrese y devuélvase.

N° 9.587-2022.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señora Andrea Muñoz S., señor Diego Simpertigue L., ministra suplente señora Dobra Lusic N., y las abogadas integrantes señoras Carolina Coppo D., y Leonor Etcheberry C. No firman la ministra suplente señora Lusic y la abogada integrante señora Etcheberry, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por haber



terminado su periodo de suplencia la primera y por estar ausente la segunda. Santiago, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés.



En Santiago, a veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

